

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO GOBIERNO

*Bertha García Gallegos**

Como producto de una cultura política autoritaria que hizo de los cuarteles, las asonadas militares y las dictaduras, referentes claves de la Construcción Nacional, ha quedado como legado una incapacidad permanente para entender la realidad política en su total dimensión. La fuerza y lo jurídico son dos caras de la política. En las civilizaciones avanzadas y democráticas se supone que la Ley debe controlar a la fuerza para que un "orden jurídico prevalezca" y se haga posible una convivencia social con paz, libertad, y justicia. Se supone que la política es la instancia creadora que puede alcanzar ese logro. Esto si fuera capaz de elaborar y mantener, de entre tantos y tan disímiles intereses, ese algo tan preciado que llamamos "bien común".

Si la fuerza, en cualquiera de sus formas, permaneciera como reguladora, mediadora, árbitro de la vida social e institucional de un país, jamás se lograría un orden democrático, basado en las responsabilidades ciudadanas. Un Estado "civil" emancipado del fundamentalismo reverencial hacia la fuerza, permite que la voluntad ciudadana sea representada en instituciones jurídicas y administrativas eficientes, transparentes y éticas. La realidad del siglo XX exige que los órganos y las instituciones del Estado tengan como atributos insoslayables, la profesionalización, especialización en sus misiones, pero también la capacidad para interactuar dentro de un marco legal coherente y transparente para lograr un eficiente uso de los recursos de todo género y dar un mejor servicio a la población, especialmente a aquella menos afortunada. Saber es indispensable para manejar la cosa pública. La improvisación, el romanticismo, el voluntarismo, no son buenas herramientas de

CONTENIDO

EDITORIAL

SEGURIDAD Y DEFENSA EN LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO GOBIERNO

PÁG. 1

LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA POLICIAL EN AMÉRICA LATINA

Marcelo Fabián Saín

PÁG. 2

EL MINISTERIO CIVIL DE LA DEFENSA

PÁG. 5

DETERIORO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA: ¿HASTA QUÉ PUNTO ES RESPONSABLE EL MODELO POLICIAL DEL ESTADO ECUATORIANO?

Juan Rivadeneira Frisch

PÁG. 6

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

Noviembre - Diciembre 2006

PÁG. 8

gobierno dada la complejidad y la responsabilidad que esta tarea implica.

Hace 27 años, en 1979, cuando se restauraba a duras penas el poder civil, se podía esperar que en el Ecuador poco a poco fuera emergiendo esa capacidad de visualizar los dos grandes espacios de la política, desde la autoridad surgida de la voluntad popular; y que poco a poco, independizándose el gobierno civil de la tutela de la fuerza, la pusiera en su debido lugar, controlada y articulada en el conjunto de las instituciones del Estado. Eso nunca ocurrió. Partidos y políticos recurrieron al cómodo recurso de desentenderse de las organizaciones de fuerza, (FFAA y Policía) y a manejar tan solo la mitad de la realidad política institucional; aquella, la civil, la de los juegos pseudo democráticos y las componendas por debajo de la mesa. Por su parte, la formación, educación y capacitación de los jóvenes oficiales y soldados ha ocurrido bajo el influjo de viejas doctrinas totalitarias, bajo la crítica mordaz "a los civiles", como si éstos pertenecieran a otro país, acusándolos de incompetencia para manejar el Estado, produciendo de paso, una doctrina que legitima la crónica intervención militar en la política. Partidos, políticos y "burocracias sanguinarias" (estamento especializado en servir a gobiernos de turno, cualquiera sea su ideología o su patrón) han permitido que tal cosa ocurra, con tal de que, en momentos cruciales, se les facilite el juego perverso de su reiterado reacomodo en el poder, en medio de rituales precedidos en los cuarteles por juramentos y lealtades ajenos a la vida democrática.

Al finalizar el Gobierno de Alfredo Palacio, y frente al advenimiento de un nuevo gobierno, estas preocupaciones se actualizan. Entre noviembre y diciembre se realizó el debate legislativo sobre la nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional y las reformas a la Ley de Personal de las FFAA.

Una verdadera puja entre funcionarios militares en servicio activo del Ministerio de Defensa y los escasos legisladores que pugnaban por una reforma más profunda, cuyos proyectos entraron en consideración, junto con los proyectos presentados por los militares. Como resultado han quedado unos pocos pero sustantivos avances. La Fundación Democracia, Seguridad y Defensa, se precia de haber contribuido con materiales y reflexiones de tipo jurídico y académico a estos logros.

En el frente policial, los dos últimos meses del año, demostraron la más severa crisis institucional, de la cual se ocupa con más amplitud este Boletín. La Policía, sustantivamente menos politizada que las Fuerzas Armadas, ha sido permanentemente relegada de la atención gubernamental, como si fuera el "patio de atrás" del Estado ecuatoriano. En días previos a la posesión presidencial se transparentó la intención del Ministro de Gobierno designado de emprender en una reorganización total de la Policía Nacional y esperamos que vaya más allá, e incluya el conjunto del modelo policial del País.

Pero la nota sobresaliente que concitó el mayor interés ha sido el nombramiento de un civil para el Ministerio de Defensa, (más apropiadamente, de una Ministra civil de Defensa). La prensa, los medios en general, que en el Ecuador son más lúcidos que los políticos, han saludado este hecho positivo como "una reparación largamente esperada por el sistema político e institucional" ecuatoriano.

* Socióloga. Profesora de la PUCE. Directora Ejecutiva de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa.
Correo: bgarcia@andinanet.net.

LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA POLICIAL EN AMÉRICA LATINA

Marcelo Fabián Sain*

La *democracia* se estructura sobre la base del *principio de autonomía* por el cual *las personas deben ser libres e iguales en la determinación de las condiciones de su propia vida*. No se restringe exclusivamente a las elecciones libres basadas en el sufragio universal, sino que también supone el ejercicio pleno de la ciudadanía con relación a los derechos y libertades civiles, políticas y sociales modernas.

1. La Seguridad Pública en Democracia

En una democracia, la *seguridad pública es una situación social* libre de riesgos y conflictos, que proporciona un marco adecuado para que las personas ejerzan plenamente

te sus derechos y libertades frente a una posible emergencia de *hechos lesivos* que pueden limitarlos. En ese contexto, la democracia facilita la conformación de *mecanismos y acciones institucionales y sociales* tendientes a controlarlos y conjurarlos. Esos mecanismos y acciones constituyen el *sistema institucional y las políticas de seguridad pública*. Así, una *política de seguridad pública* es el conjunto de *intervenciones públicas* llevadas a cabo por diferentes *actores estatales y sociales* —públicos o privados— para resolver aquellos *riesgos y conflictos* —concretos o previsibles— de carácter *violento y/o delictivo* que lesionen los derechos y libertades de las personas.

Toda *política de seguridad pública* se estructura sobre la base de tres componentes fundamentales:

1. La elaboración y actualización permanente de un *cuadro de situación de la violencia y el delito* que permita una comprensión —estratégica y táctica— de los problemas que serán el objeto de prevención, conjura o persecución penal del sistema de seguridad pública.
2. El desenvolvimiento de una *estrategia institucional* asentada en la elaboración de un *diagnóstico institucional* sobre el estado de situación del sistema institucional de seguridad pública.
3. El desarrollo de una *estrategia de control de la violencia y el delito* articulada a una *estrategia social de prevención y control*, gestionada por el sistema de prevención social.

Gobernar la seguridad pública no es más que llevar a cabo las acciones tendientes a desarrollar estos componentes.

La *estrategia de control de la violencia y el delito* constituye el núcleo fundamental de la política de seguridad pública. El *cuadro de situación del delito y la violencia*, así como la *estrategia institucional*, configuran dimensiones instrumentales básicas para la elaboración y puesta en marcha de aquella estrategia de control delictivo.

El *cuadro de situación de la violencia y el delito*, resultante de un proceso permanente de recopilación y sistematización de información, debe conducir a un diagnóstico de la situación general y específica del delito y la violencia existente en un tiempo y espacio determinado; así como indicar su probable evolución, despliegue territorial, impacto social e institucional. Sin este conocimiento resulta imposible desarrollar estrategias focalizadas y eficientes.

La *estrategia institucional*, proporciona una visión detallada de la organización y funcionamiento real de las estructuras de gobierno concernientes a la seguridad; sus agencias, componentes y personal. También un conocimiento pormenorizado de las condiciones institucionales para responder a las problemáticas delictivas y de violencia. El conocimiento favorece el desarrollo de un proceso de modernización y fortalecimiento institucional —en los planos organizativo, funcional y doctrinal—. La estrategia debe partir también de la elaboración de un *diagnóstico institucional* del ámbito de la seguridad, de los sistemas de prevención social, policial; persecución penal, participación comunitaria y del sistema de seguridad privada. La estrategia institucional conlleva el diseño y desarrollo de programas y planes de *reforma y modernización legal e institucional* del sistema.

Tanto el cuadro de situación como la estrategia institucional, constituyen las acciones instrumentales de las políticas de seguridad pública y están orientadas a sentar las bases conceptuales e institucionales de lo que, en verdad, conforma una *estrategia de control de la violencia y el delito*, asentada en dos tipos de intervención. En primer lugar, una

modalidad de intervención social de prevención y control de la violencia, gestionada por el sistema de prevención social de la violencia y el delito. Y, en segundo término, una *modalidad de intervención institucional, de prevención y control de la criminalidad común y compleja* llevada a cabo por el sistema policial y judicial de la jurisdicción, sin excluir la intervención de otras agencias estatales no-policiales ni judiciales y de otros actores sociales.

2. Instancias decisorias y operativas del Sistema de Seguridad

También en un contexto democrático son las autoridades gubernamentales las encargadas de tomar las decisiones institucionales fundamentales en torno de este conjunto de componentes. En este marco institucional es claro que la *institución policial* constituye apenas una *instancia subordinada y secundaria* dentro del sistema de seguridad pública democrática, lo que impide reducir ésta a la esfera policial.

La *Policía*, en cambio, constituye la institución encargada de velar por "*el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas*", a través del desarrollo de un conjunto de labores institucionales que giran en torno del *control del delito y las infracciones contravencionales*.

A diferencia de otras instituciones, la *competencia y atribución exclusiva de la Policía* está dada por la *autorización social y legal que tiene para hacer uso de la fuerza física, real o potencial, para afectar el comportamiento de determinadas personas, limitando sus derechos y/o libertades individuales en razón del interés público*. Pero la *Policía* no se manifiesta exclusiva o predominantemente a través del uso efectivo de la fuerza; también utiliza un amplio espectro de formas y medios de acción que comprende desde actividades comunitarias, sociales y culturales, hasta intervenciones y técnicas discretas tales como las interceptaciones telefónicas o informáticas; la adquisición o recolección de información; la elaboración de análisis de inteligencia criminal; las entregas controladas de mercancías prohibidas, entre otras. Ninguna de ellas supone el uso de la fuerza física. No obstante, éste constituye "*el recurso policial por excelencia*" y, además, es "*el más espectacular del conjunto de medios de acción no contractuales que fundan el instrumento policial y que él detenta*".

Solo la *Policía* está habilitada —social y legalmente— para actuar en función del control —prevención, conjura, investigación— de eventos delictivos o contravencionales, mediante el uso de la fuerza física, todo lo cual debe estar *expresamente determinado dentro del orden jurídico interno*.

3. Problemas de la Administración de la Seguridad Pública en América Latina

En las democracias latinoamericanas, estas *responsabilidades de gobierno* no son habitualmente ejercidas por las

autoridades gubernamentales sino por las propias instituciones policiales. Veremos cuáles son sus consecuencias. Durante las últimas décadas, ha sido recurrente el *desgo-bierno político sobre los asuntos de la seguridad pública*; las dirigencias políticas *delegaron* crónicamente a las agencias policiales el monopolio de la dirección y de la administración de la seguridad pública. Esta esfera institucional se ha convertido en un ámbito exclusivamente controlado y gestionada por la Policía en base a criterios, orientaciones e instrucciones autónomas y corporativamente definidas y aplicadas sin intervención determinante de las autoridades electas. Estas tendencias impidieron la estructuración de dispositivos normativos, organizacionales y funcionales apropiados para el ejercicio integral del gobierno político de la seguridad pública y trajeron consigo múltiples *deficiencias institucionales*.

En primer lugar, es notoria la *falta de un desarrollo normativo* adecuado para la conducción política sobre los asuntos de la seguridad pública. Los diferentes componentes del régimen legal y normativo regulatorio de la seguridad pública han quedado obsoletos y desactualizados; ineficientes para afrontar las complejas problemáticas que actualmente existen al respecto. Los anacronismos funcionales y organizativos del sistema de seguridad pública datan de décadas atrás, sobre todo, de épocas dictatoriales o pos-dictatoriales.

En segundo término, es significativa la *ausencia de estructuras organizacionales de conducción político-institucional de la seguridad pública*, dentro de la rama ejecutiva de los gobiernos. Las estructuras existentes son generalmente endebles en el desempeño de esas labores, y han quedado desvinculadas y descoordinadas organizativa y funcionalmente entre sus diferentes componentes, muchas de las cuales dependen de diferentes carteras ministeriales o secretarías de Estado.

En tercer lugar, es recurrente la *inexistencia de un servicio civil de seguridad pública*, compuesto por funcionarios y agentes gubernamentales especializados y altamente capacitados en el ejercicio del gobierno de la seguridad pública, particularmente, del diseño y aplicación de las políticas criminales y de seguridad, de la gestión político-institucional del sistema de seguridad pública en su conjunto y, específicamente, de la dirección superior del Sistema Policial y del resto de las agencias intervinientes. En general, estos menesteres han sido llevados a cabo por efectivos policiales o, en su defecto, por funcionarios y agentes sin experiencia alguna en los estos temas, en muchos casos seleccionados de acuerdo exclusivamente con su pertenencia partidaria, generando una suerte de politización del sector.

También es significativa la *ausencia de mecanismos institucionales de mando civil sobre el Sistema Policial*, esto es, la inexistencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que las autoridades gubernamentales ejerzan la

conducción institucional superior y la administración general del Sistema Policial de la Jurisdicción.

Esta situación ha vulnerado sistemáticamente la posibilidad de desarrollar un abordaje integral de estos asuntos y ha dado lugar a la *apropiación policial* de los mismos. En primer lugar, el cuadro de situación acerca del delito y la violencia, son elaborados por la misma Policía, sobre la base de una visión institucional, que casi siempre giró en torno de la sistemática afirmación de que el crecimiento de la violencia y del delito ha estado vinculados en forma directa por el aumento de la pobreza, y que la única manera de contenerlo y controlarlo es dotando a la institución policial de mayores facultades discrecionales y medios operacionales.

En América Latina la Policía monopolizó los ámbitos estatales de la información acerca del delito, de su envergadura, su despliegue y su evolución, lo que la proyectó como la única agencia estatal con capacidad para producir análisis de la situación, en función de sus propias perspectivas, orientaciones e intereses institucionales. Ante las autoridades gubernamentales y la sociedad, dicho diagnóstico casi nunca reflejó la verdadera realidad delictiva que en muchas ocasiones, fue "inflada o magnificada" a la hora de reclamar más facultades y recursos institucionales y, en otras oportunidades, o "subvaluada u ocultada" a los efectos de esconder ineficiencias en el desempeño policial o la corrupción derivada de la regulación de ciertas actividades criminales, imponiéndose siempre la versión policial de los hechos y de la problemática criminal.

Ha sido la propia Policía, la institución encargada de la elaboración y puesta en marcha de las estrategias institucionales tendientes a estructurar el sistema de seguridad pública, y en particular, su propio desarrollo institucional. Al amparo de desconocimiento y la incompetencia gubernamental para gestionar un verdadero sistema institucional de seguridad pública y, en particular, a la institución policial, en sus regulaciones y formas organizacionales; sus prácticas, rutinas y concepciones institucionales.

Todos estos factores que afectan la elaboración del cuadro de situación acerca del delito y de las estrategias institucionales, han tenido como consecuencia inevitable, que recayera en la propia institución policial la responsabilidad institucional fundamental en el diseño y desarrollo de las estrategias de control del delito, dándole a éstas una fuerte impronta policial y hasta castrense bajo la égida del "combate o guerra contra el crimen" y desechando toda forma de intervención asentada en la prevención social de la violencia.

* *Polítologo. Interventor General de la Policía Aeroportuaria de Buenos Aires, Argentina. Los contenidos del artículo fueron expuestos por el autor en el Seminario "Claves de la Seguridad Interna en el Estado Democrático: conducción, control político, conceptos, métodos y participación ciudadana", Fundación DSD. PUCE y KAS. Quito, 26 de septiembre de 2006.*

EL MINISTERIO CIVIL DE LA DEFENSA

El solo rumor de que el Gobierno de Rafael Correa, quien asumirá la Presidencia del Ecuador el 15 de Enero próximo, pensaba nombrar a un civil para la Cartera de Defensa, fue saludado con entusiasmo por gran parte de la prensa nacional que calificó al hecho como "una reparación largamente esperada por el sistema político e institucional del país". La tradición de esta medida se la perdió durante las dictaduras militares de mitad del siglo pasado. Desde el regreso a la constitucionalidad, en 1979, la designación de un militar en servicio activo primero, y después de un pasivo, fue producto de una "negociación" tras bastidores.

En cambio, ha sido notoria la resistencia de los militares a la posible medida. Ellos han presionado ante la opinión pública, deslizando incluso nombres de "civiles que sí serían aceptados" si fuera el caso de que el gobierno se empeñe en cumplir con lo propuesto. Tales maniobras se explican porque desde la perspectiva militar en el Ecuador todavía se cree que el Ministerio de Defensa es un espacio propio, conquistado a fuerza del ejercicio de una cerrada autonomía institucional frente a los gobiernos legítimamente electos; autonomía que ya no compagina con los principios del Estado de Derecho en el mundo. En América Latina quedan pocos países que mantienen Ministerios militares de Defensa. En muchos de ellos (Chile, Argentina, Uruguay, Colombia) han sido mujeres las que han llevado con éxito la administración de la Defensa. En Europa Occidental, donde el Ministerio Civil de Defensa es una institución consagrada, el solo hecho de plantear dudas sobre si tal funcionario debe ser hombre o mujer, es considerado todo un anacronismo. En todo caso y a todas luces, el que los militares pretendan negociar tales designaciones, poner reparos a los candidatos que el Jefe de Estado designe, o peor tratar de imponer a sus civiles adictos a los cuarteles, se lee en estos tiempos como demostración de un bajo nivel de profesionalidad y disciplina.

Desde las transiciones de las dictaduras militares hacia las democracias civiles, el nombramiento de civiles para dirigir el Ministerio de Defensa, ha tenido un enorme significado, independientemente incluso de los conocimientos específicos que el civil pueda tener sobre aspectos muy técnicos de la Defensa. Es preferible que los tenga por supuesto. Pero lo importante es que esté dispuesto, interpretando la estrategia del gobernante, a desarrollar un espacio del Estado de Derecho: la relación entre **autoridad política y mando**, que se había perdido al confundirse —durante las dictaduras y mediante la gestión de militares como Ministros de Defensa— estas dos instancias en una sola, perturbando la eficaz marcha de la organización militar.

El Ministro civil que representa al gobernante, aporta con la **visión del ciudadano**, que es quien legitima no solo las acciones y las operaciones estratégicas de las FFAA, sino hasta la misma existencia de la institución militar. Lo hace

en virtud de objetivos específicos que tienen que ver con la Defensa del Estado frente a posibles amenazas que pudieran provenir de otros Estados, o de actores externos armados y organizados. Los ciudadanos pueden elegir incluso si frente a estas amenazas usarán o no el recurso de la fuerza como ultima ratio; o renunciarán a ella en virtud de un estatuto de país no beligerante, acogido y legitimado por el Derecho Internacional. Recordemos que Suiza, mediante este recurso, se libró de participar en las dos guerras mundiales del siglo XX y se ha librado de participar en los conflictos armados que azotan al mundo en estos días. No se quiere decir que tal decisión sea mejor o peor para el Ecuador, solo recordar que es posible si las condiciones lo permiten. En general, en un mundo inestable el tener un ejército profesional en dimensiones y proporciones acordes con las capacidades de un país, puede ser aconsejable como un seguro que en alguna circunstancia resulte particularmente útil.

Ministros de Defensa Civiles desde la República

Año	Nombre
1849	Manuel Gómez de la Torre
1910	Francisco Martínez Aguirre
1912	Federico Intrigo
1916	Atanasio Zaldumbide
1917	Rafael Pino
1924	Leonardo Sotomayor
1926	Leonardo Palacios
1939	Galo Plaza Lasso
1947	Manuel Navarro
1948	Manuel Díaz
1952	Carlos Arosemena Monroy
1954	Pedro Menéndez Gilbert
1955	Teodoro Ponce
1956	Milton Sánchez
1957	Alfonso Calderón
1958	Gustavo Díez
1960	Enrique Ponce Luque
1961	Patricio Lasso
1962	Francisco Acosta Yépez
1966	Simón Dávalos
1966	Fausto Cordovez Chiriboga
1966	Agustín Febres Cordero
1970	Jorge Acosta Velasco
1972	Luis Robles Plaza
2007	Guadalupe Larriva

Diario El Comercio, Quito. Fecha de Publicación: 2006-12-29

La perspectiva del ciudadano cuidará que los recursos de todos sean bien administrados y que el empleo de la fuerza sea solo en función del bien común. Además tendrá que responder ante los votantes por todo ello. **El mando**, en cambio, es la instancia militar profesional encargada de mantener la disciplina, la eficacia, el adiestramiento, la capacitación permanente y los estándares profesionales del personal militar.

El desarrollo del Ministerio civil de Defensa en el Ecuador, hará posible una saludable relación de estos dos ámbitos. Tarde o temprano contribuirá a ampliar las capacidades

para el manejo con transparencia del presupuesto militar; una reingeniería de los procesos de organización que hagan más eficientes y menos burocráticas a las FFAA; proveerá un necesario control sobre actuaciones autoritarias que vayan en detrimento de criterios de equidad y mérito que deben primar en la evaluación y ascensos; sistemas transparentes de adquisición de tecnología. Todo ello contribuirá a optimizar el Sistema de Defensa del Ecuador, si es que se lo asume con ética, claridad y voluntad de cambio.

DETERIORO INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA: ¿HASTA QUÉ PUNTO ES RESPONSABLE EL MODELO POLICIAL DEL ESTADO ECUATORIANO?

*Juan Rivadeneira Frisch**

En los meses de noviembre y diciembre de 2006, la Policía Nacional fue foco de atención pública por una serie de hechos que opacaron, una vez más su imagen, y su propia intención de desarrollar un plan de modernización e institucionalización.

Una nueva ola de escándalos comenzó el 8 de noviembre, cuando se produjo la sustracción de \$367.542 en Machala, dinero que se mantenía guardado en cajas de cartón en las oficinas de la Policía Judicial de la Provincia, y que había sido decomisado de la Notaría de José Cabrera un año atrás. Cabrera mantenía en la mencionada notaría un negocio de inversiones en el que participaban un alto número de miembros de las FFAA y de la Policía. El resultado de las investigaciones sobre tal participación todavía no se conocen, pero en primera instancia fueron detenidos el Comandante Provincial, el Jefe de Tránsito y los Jefe y Subjefe de la Policía Judicial. El dinero recaudado había sido puesto en custodia de la Policía de Machala y se mantenía en la misma bodega de la entidad. De allí desapareció en la fecha mencionada, siendo los responsables confesos, los propios encargados de la vigilancia.

Pero este hecho no fue el único que opacó las filas de la Policía Nacional. En el mismo mes, se produjo la detención en las puertas del ex penal García Moreno de Quito, del condenado por narcotráfico Oscar Caranqui, cuando se aprestaba a salir del ex penal junto con otros policías que lo ayudaban, operación que se habría repetido por siete u ocho ocasiones previas, según lo confirmó Caranqui al declarar ante el Fiscal de Delitos Misceláneos. En todas las ocasiones fue ayudado por oficiales. Caranqui abandonaba el penal entre las 23h00 y las

06h00, antes de que se produzca el cambio de guardia y nadie sospeche su salida. Inclusive declaró en la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional, que hay ciertos reos que salen de prisión para "dar clases" a hijos de oficiales. El Subteniente Wilmer Andrade señaló que fue a beber con Caranqui en su celda, donde dejó olvidado su uniforme. Cuando se aprestaba a salir del ex penal, vestido como oficial de Policía, el guía penitenciario de turno se percató de las intenciones y se produjo la detención. El control policial 101 y la prensa impidieron que se regresara al detenido a su celda. Las órdenes de salida según Caranqui provenían de un miembro del Alto Mando Policial. Para sorpresa de todos, los policías involucrados señalaron que no estaban realmente ayudando a fugar a Caranqui, sino que lo estaban llevando a "divertirse" cosa que ya era habitual. Los gendarmes imputados fueron: Orlando Acosta, Christian Pantoja, Wilmer Andrade, Sixto Haro, Jefferson Herrera, Álex Cevallos, Jorge Cahuasqui y Washington Jaramillo, contra los cuales dictó orden de prisión el Juez décimo quinto Penal de Pichincha. Y para Caranqui se ratificó 16 años de prisión conjuntamente con su esposa.

Miembros del Alto Mando Policial han manifestado que este es un problema derivado de fallas importantes en el proceso de selección de personal. En el último año y ante el requerimiento de más uniformados por parte de algunos alcaldes, para combatir el incremento de la delincuencia, se procedió a un reclutamiento apresurado de personal que luego resultó no ser idóneo. El Gobierno de Gustavo Noboa, según el Diario El Comercio de Quito, del 18 de noviembre, se impuso la tarea de incorporar 4.000 nuevos policías cada año. Al momento habría 42.000 miembros en total. Esta medida ha sido criticada por el actual Inspector General de la Policía, Wilmon Padilla, dado que el ingreso se realiza por carpeta y no

por un estudio sociológico de los aspirantes. La Dirección de Educación de la entidad realizó los estudios de antecedentes penales, pero al parecer no fueron suficientes.

El bimestre no terminó con estos lamentables sucesos, las denuncias continuaron. El Mayor en servicio activo, Álvaro Cadena, solicitó a la Contraloría que se investiguen y auditen varios casos de manejo de dinero: uno de ellos por parte de la esposa del Comandante General y Directora de la Fundación de la institución (Fundebit); por la transferencia de \$8 millones a la Policía para el proyecto de Seguridad Ciudadana de Guayaquil; a la empresa Gasiespol por una supuesta importación irregular de pistolas para la Corporación de Seguridad. Finalmente, la Comisión Anticorrupción emitió un informe donde se detecta principios de responsabilidad en contra de los Generales Rodrigo Cartagena y Mario Morán, por un supuesto malgasto de fondos públicos para la compra de impresoras y materiales para licencias, contrato que fue firmado por Cartagena con la empresa Defencorp por \$139.720, la Policía argumentó "causas de excepción".

Ante los hechos sucedidos, el Presidente de la República, Alfredo Palacio, pidió una depuración total de la institución. El Comandante General de la Policía, José Vinueza, señaló que la Policía ejecuta este proceso de modo permanente, y que no se deben generalizar los casos de corrupción a todos los miembros de la institución. Sobre el tema, Vinueza señaló que en su plan de autodepuración de enero a junio de 2006, tuvo 60 uniformados con orden de prisión y con procesos penales por delitos varios, de estos solo 4 eran oficiales¹. Según datos de la Inspectoría General de la Policía en dos años 6.466 policías han sido investigados administrativamente; de estos: 316 oficiales, clases y policías han sido dados de baja, mientras que 1.447 fueron sancionados disciplinariamente y 1.084 pasaron a órdenes de la autoridad competente².

Es pertinente anotar que se han realizado permanentes reflexiones por parte de la sociedad civil sobre la situación y reestructuración de la institución. La PUCE mantiene un espacio permanente de estudios y desarrollo de propuestas en torno a la organización policial y más aun, sobre el modelo policial y de seguridad ciudadana que se mantiene en el país y sobre el cual hay que hacer profundas transformaciones. Lo propio hace la FLACSO, con su programa de "Ciudad Segura". Las redacciones editoriales de los periódicos nacionales y las opiniones de rotativos de prensa nacional, han señalado las falencias del sistema en repetidas ocasiones. Para Diario El Comercio, la crisis de la Policía es estructural e inciden varios factores tales como: la incapacidad de autodepu-

ración, deterioro del Ministerio de Gobierno, y un elemental cumplimiento de las normas constitucionales³. Fernando Carrión señala que en 2005 se investigó a 3.368 policías por problemas disciplinarios (9% del total de los policías), lo cual delata que el problema no solo se arreglará con una purga de malos miembros⁴.

Es necesario añadir la postura del Ministro de Gobierno designado, Gustavo Larrea, acerca de la situación de la Policía. Él ha mencionado que existirá una nueva Política de Seguridad y combate al crimen organizado, mediante la reestructuración de la entidad policial. Su propuesta es dividir la institución especializándola en varios campos problemáticos: existirá una Policía Comunitaria, y se fortalecerá la Policía Técnica Judicial, Unidades Antisecuestros y Antidroga, para el combate al crimen organizado.

La situación de la Policía Nacional, en tanto imagen proyectada hacia la sociedad civil, de la que debería gozar de una confianza permanente, se ve afectada por la serie de actos de corrupción, entre otros, los señalados en este artículo. Pero sería un grave error concluir que la sencilla remoción de los implicados solucionará los problemas, principalmente por la polarización de las sanciones y el destino de las inculpaciones, siendo 856 los casos en trámite en la Corte Policial, de los cuales 762 son para tropa, y 91 para Oficiales. Quiere decir que la frecuencia mayor (8 veces más) se produce en la tropa. De los fallos condenatorios dados en este año, 89 corresponden a la tropa y 13 a Oficiales. En fallos absolutorios 82 para la tropa, siendo 29 para los Oficiales⁵. De esta forma, no se pretende poner en duda la integridad de los Oficiales, pero quedan varias preocupaciones: ¿todos serán juzgados con las mismas consideraciones? Lo detectado en este año ¿es una situación permanente? o simplemente ¿se tratan de casos aislados? Se espera que el nuevo gobierno afronte la crisis con medidas mucho más consistentes. No solo la Policía es la que tiene que cambiar sino todo el conjunto del Sistema Policial que también alcanza al Ministerio de Gobierno, existiendo la necesidad de transformarlo, especializarlo y profesionalizarlo, a dicho sistema, en los ámbitos que maneja. En el Ecuador el Ministerio de Gobierno también se ocupa de la Policía y de las municipalidades, y en el último gobierno (de Palacio) demostró una extrema fragilidad institucional.

* Investigador de la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa.

3. Diario El Comercio 2006-11-15.

4. Diario Hoy 2006-11-18.

5. Datos proporcionados por Diario El Comercio de 2006-11-29, en base a información de la Corte Nacional de Policía.

1. Diario Hoy, 2006-11-14. Se incluye el siguiente dato: 87 policías tienen orden de prisión en 2006. Solo 14 son oficiales y 73 de tropa.

2. Diario Expreso de Guayaquil, 2006-11-15.

CRONOLOGÍA DEFENSA, SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA

RESUMEN DE LOS TEMAS SOBRESALIENTES EN NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2006.

El Observatorio de Relaciones Civil-Militares y Fuerza Pública forma parte del trabajo permanente que realiza la Fundación Democracia, Seguridad y Defensa; y se propone dar seguimiento a los acontecimientos que competen a las instituciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Armadas; Policía Nacional); generar una discusión permanente sobre la adecuada gestión de este sector dentro de los parámetros del Estado de Derecho. En el período noviembre-diciembre de 2006 resaltan 6 temas fundamentales.

1. RELACIONES ECUADOR - COLOMBIA

Supuesta presencia guerrillera colombiana en la frontera de Ecuador. A inicio de noviembre el Gnrl. Jorge Peña, comandante de la IV División del Ejército Amazonas señaló que "no existe presencia de elementos subversivos operando en nuestro territorio" (El Comercio 01/11/06). Cancillería envió una protesta diplomática a Colombia (tercera en dos semanas) confirmando la declaración de Peña y negando colaboración con el Ejército colombiano. El ministro de defensa Marcelo Delgado lo confirmó y criticó el escaso número de gendarmes colombianos en frontera (Expreso de Guayaquil 02/11/2006).

La aplicación de la nueva Política de Defensa se detuvo por la salida del Ministro Jarrín. Se habría previsto el traslado de 15 campamentos de la frontera sur a la norte, intervención militar en el narcotráfico, migración, lavado de dinero y delito internacional organizado. Para esto FFAA necesitaría mayores recursos. En 2006 el Estado entregó \$50.000.000 más que en 2005 al sector. En el análisis de Diario El Comercio del 14 de noviembre se citan cifras del Ministerio de Defensa e Informe Nueva Mayoría: Proforma Defensa: \$700 millones (9.6% del Presupuesto del Estado): 58.70% a Fuerza Terrestre, 21.18% a Naval y 20.12% a Aérea (El Comercio 14/11/06).

Incidentes diplomáticos por reinicio de fumigaciones en la Frontera Norte. Al finalizar noviembre surgió el rumor de reinicio de fumigaciones de plantaciones de coca por parte de Colombia, en la frontera norte. Lo ratificó la Embajada de Colombia en Quito (Expreso de Guayaquil 30/11/06). El presidente electo Rafael Correa criticó el posible reinicio y señaló que deberán hacerlas "a pie" (El Comercio 11/12/06). En diciembre Colombia anunció el reinicio de aspersiones aéreas; Antinarcóticos aclaró que esto no ha ocurrido en la zona de 10 kms fijado (Hoy 12/12/06). Anuncio que preocupa a Cancillería, por el estado de las relaciones

entre los países (Hoy 12/12/06). Policía colombiana ratifica el reinicio. El Canciller Francisco Carrión dijo no tener notificación alguna (Expreso de Guayaquil 12/12/06). Para Marco Arauz (El Comercio) ésta es una situación compleja, dado que "un Jefe Antinarcóticos de Colombia, ha reconocido que las operaciones se hacen cerca de la frontera. Problemas internos de Colombia con el tema de relaciones de funcionarios con paramilitares, darian sentido a las acciones (El Comercio 13/12/06). Para el ex Canciller José Ayala Lasso, el problema debe solucionarse por los canales pertinentes, fortaleciendo los argumentos de Ecuador, aumentando el apoyo de mandatarios sudamericanos. Para la ex Canciller colombiana, Ma. Emma Mejía, se debe dar paso a una solución estructural (Expreso de Guayaquil 22/12/06).

Correa afirmó que pidió la intervención de la ONU y OEA, y hablará con Uribe. El Canciller Carrión de Ecuador señaló que mientras no se conozca de manera oficial el irrespeto de los 10 km., previsto en las negociaciones Ecuador-Colombia, no puede reaccionar el país. Pero el Ministro Delgado dijo que el 12 de diciembre ya sabía del reinicio de las fumigaciones aéreas, y que los 13 destacamentos de frontera informaron que no se realizan sobre la franja delimitada (El Comercio 13/12/06). Cancillería colombiana señala en comunicado que fumigará en la franja, dado que se ha cumplido la temporalidad fijada (Expreso de Guayaquil 13/12/06). El acto fue considerado por Carrión como una hostilidad para el Ecuador que, a cambio, puede hacer una protesta, llamar en consulta a su Embajador en Colombia, retirarlo; e incluso dejar de recibir desplazados o repatriar indocumentados (El Comercio 14/12/06).

La Canciller colombiana dijo que se reiniciaron las fumigaciones aéreas de glifosato porque por la suspensión temporal, habrían aumentado los sembríos de coca. Dijo además que el Informe de la OEA declara la inocuidad del glifosato. Pide comprensión al Ecuador porque "el negocio de la droga financia a los terroristas" (El Comercio 14/12/06). Carrión culpó a la falta de vigilancia militar de la frontera colombiana el aumento de los cultivos. En visita a la zona de frontera, el Presidente y el Canciller abordaron el tema. Carrión pidió al Embajador de Colombia, retirar una nota de protesta y el pedido de suspender las fumigaciones. Finalmente el Embajador ecuatoriano, Alejandro Suárez fue llamado en Consulta (El Comercio 15/12/06). El Presidente Uribe señaló que ha hecho esfuerzos por tener militares en frontera, y mientras se vaya dominando a las FARC, se erradicará manualmente (El Comercio

16/12/06). Carlos Holguín, Embajador de Colombia en Ecuador, reconoció el descuido (Hoy 16/12/06).

Activados los sistemas de seguridad aérea en la frontera ecuatoriana, no se han detectado sobrevuelos de naves colombianas a 100 mts. El despliegue se intensifica con cerca de 8.000 efectivos (13 destacamentos). Colombia solo tiene un cuartel en Ipiales (El Comercio 16/12/06). De suspenderse las fumigaciones, Carrión está dispuesto a viajar a Bogotá para solucionar el conflicto; y discutir las condiciones para un estudio conjunto y la ONU (Hoy 16/12/06). El 18 de diciembre se reúnen el Canciller Carrión y el Embajador Suárez, para revisar la información en medio del llamado en consulta (El Comercio 18/12/06), se decidió que Suárez no regrese hasta la suspensión de las fumigaciones (El Comercio 19/12/06) y que mientras no se suspendan las mismas, las conversaciones con Bogotá no se reanudarán.

Presidente electo cancela visita a Bogotá ante impase generado por las aspersiones. Se supo que la respuesta de Colombia es que no se detendrán las fumigaciones y no se descarta la voluntad de un estudio conjunto. Por dicha resistencia, Rafael Correa suspendió su viaje a Bogotá (Expreso de Guayaquil 22/12/06), y se mostró favorable a una demanda internacional contra Colombia (El Comercio 23/12/06). Carrión señaló que "no tiene sentido" conversar cuando terminen las fumigaciones, dado que ya se ha hecho el daño, pero aquella es decisión de Correa (Hoy 24/12/06).

Se radicaliza el argumento del uso del glifosato. Un ataque de las FARC que dejó 17 militares colombianos muertos, radicalizó el argumento de erradicar coca con glifosato, "no nos queda más camino", dijo Uribe. Policía colombiana denunció la existencia de cultivos de droga en Ecuador, el Director Jorge Castro dijo que son 15 hectáreas (El Comercio 26/12/06). Cancillería y Defensa reaccionaron, por primera vez desde el inicio del Plan Colombia, un Canciller señala el intento de incluir a Ecuador en el Plan (El Comercio 27/12/06). Delgado declaró "agresiones psicológicas" por parte de Colombia y negó la presencia de cultivos (El Comercio 28/12/06).

2. RELACIONES ECUADOR - EEUU

El Plan de Política Exterior del Ecuador, Planex, elaborado por Cancillería, frente a la cooperación de USA para el combate al narcotráfico. El documento coincide con el II Libro Blanco de Defensa frente al conflicto colombiano y frente a la cooperación de EEUU para el combate al terrorismo y al narcotráfico. Pero antes la cooperación internacional militar y policial era canalizada por FFAA y la Policía Nacional; en adelante será a través de Cancillería; en cuanto a la coordina-

ción será entre las FFAA y el Comando Sur. El documento señala la limitación de fuerzas armadas extranjeras en el país, y deja en manos del Estado y con sus recursos el deber de enfrentar amenazas internas y externas. El Planex no se adhiere a la estrategia de EEUU en la lucha contra las drogas (Expreso de Guayaquil 06/11/2006).

Nuevo gobierno no renovará el FOL. El Presidente electo Rafael Correa reafirmó su postura de que no continúe el funcionamiento del Puesto Avanzado de Operaciones de EEUU en la Base de Manta (FOL) y la pista será dispuesta para la creación de un aeropuerto intercontinental de transferencia (El Comercio 28/11/06). Desde su instalación en 1999, las protestas no han parado. Según la Cámara de Comercio de Manta, la incidencia no ha sido mayor en la economía (El Comercio 29/11/06). El senador demócrata Harry Reid, mencionó que EEUU respeta la decisión de las nuevas autoridades de no renovar el convenio (El Comercio 31/12/06).

Suspensión de sanciones impuestas por EEUU al Ecuador. La suspensión de sanciones impuestas por EEUU a Ecuador por no dar amnistía a sus militares ante la Corte Penal Internacional no ha sido oficializada a la Cancillería. Existía la suspensión de fondos de apoyo económico. Otra sanción que ya fue levantada este año fue el impedimento de entregar becas a los militares en centros de entrenamiento en EEUU. Ecuador es miembro de la Corte Penal desde su creación en Roma en 1998 y lo ratificó en 2002. El Tribunal sanciona crímenes de relevancia internacional. A pesar de la existencia de esta sanción, se mantiene la de financiación para FFAA extranjeras, que facilita la compra de material militar a los EEUU (El Comercio 01/12/06).

3. REFORMAS A LEYES MILITARES

Nueva Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Las Comisiones Civil y Penal y de Asuntos Constitucionales pulieron el texto definitivo del informe de la nueva Ley Orgánica de Defensa Nacional, que suplantará a la Ley de las FFAA. Se sugiere priorizar el texto del Dr. Rivera, que propone reforzar el poder civil por sobre la estructura y funciones de las FFAA. La propuesta del Ejecutivo tiene una visión que mantiene la actual estructura. La intención del Titular del Congreso es que en sesión extraordinaria se aprueben las reformas (Expreso de Guayaquil 08/11/2006). La primera sostiene que los aspectos político-administrativos corresponden al Ministerio de Defensa, y los estratégicos-militares al Comando Conjunto. Se replantea que el Ministerio tenga la función de ejecutor de la Política de Defensa, el diseño de la misma al COSENA y la conducción al Presidente. El Estado Mayor Conjunto tendrá atribuciones técnicas

y solo en la ciencia militar. Propone el acatamiento de las Fuerzas Armadas a la Unidad Jurisdiccional. Los empleados civiles se mantienen como funcionarios públicos no militares regulados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (El Comercio 12/11/06).

Reformas a la Ley de Personal de Fuerzas Armadas. La reforma a la Ley de Personal atiende entre otros aspectos: transparencia en procedimientos de calificación y ascenso; derecho a apelación; ampliar la carrera militar hasta los 75 años, y la especificación de funciones, además de extender un año las funciones de los agregados militares en misiones diplomáticas (Expreso de Guayaquil 08/12/06). El Congreso ratificó la facultad exclusiva del Presidente de cambiar los mandos militares; se determinó que el máximo organismo de seguridad del Estado es el COSENA, integrado por el Presidente, Titulares del Congreso y Corte Suprema, Ministros de Defensa y Gobierno, Jefe del Comando Conjunto y Jefes de la tres Fuerzas. Queda excluido: Contralor, y suspendidos: Presidentes de la Junta Monetaria y de Desarrollo de Seguridad Nacional, puesto que ya no existen esos cargos (Hoy 16/12/06).

El Congreso aprobó que la Policía sea una fuerza auxiliar de la institución militar para la defensa de la soberanía, defensa interna y estado de emergencia, su preparación y empleo militar queda a cargo del Comando Conjunto de las FFAA. Las resoluciones de Defensa Nacional que ameriten el carácter de secretos, se publicarán en el Registro Oficial Reservado. Se aprobó la Unidad Jurisdiccional, por ello, el Consejo Nacional de la Judicatura y el Ministerio de Defensa, establecerán salas, tribunales, y juzgados penales militares necesarios (El Comercio 20/12/06).

Actividades económicas de las FFAA. Para el Gral. (r) René Vargas ex ministro de la dictadura militar, la participación en actividades económicas es buena para el desarrollo social y de la Defensa del País. El analista Juan Pablo Aguilar no está de acuerdo con la vinculación militar en áreas distintas a las de la Defensa (El Comercio 17/12/06). Bertha García ha cuestionado permanentemente la participación de FFAA en actividades ajenas a la Defensa, que desvía a los militares de su misión. Por fin, el Congreso limitó esa participación y militares solamente podrán intervenir en actividades relacionadas con Defensa y Seguridad Nacional; en el resto deben iniciar un proceso de desinversión de capitales. Pero la nueva Ley no especifica los criterios bajo los cuales se determinarán las empresas relacionadas con Defensa. Los militares no podrán alquilar sus helicópteros a empresas privadas como lo han estado haciendo (El Comercio 21/12/06). Se derogó el Permiso Militar que los ciudadanos ecuatorianos requerían para salir del país (El Comercio 22/12/06).

Ministra Civil de Defensa. Para Guadalupe Larriva, Ministra de Defensa designada, es importante estructurar una agenda de Defensa, para modificar el rol de FFAA, y que los militares se acerquen más a la sociedad civil. FFAA deben ser garantes de la paz interna y promotoras de la seguridad regional. Se debe revisar las Leyes de Personal y Orgánica de FFAA; de tal forma el Presidente debe vetarlas. Se tiene que adecuar y ampliar las Políticas del Libro Blanco, como Política de Estado. No intervención en el Plan Colombia. El hecho de que se nombre una mujer, civil en el Ministerio es un cambio de costumbre que incidirá en la vida del País. Tiene claro que el Ministro no es el estratega de las operaciones militares, sino el administrador de las Políticas de Defensa (El Comercio 28/12/06).

4. **POLICÍA: CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA**

Corrupción Policial (Casos Cabrera y Caranqui). **Depuración.** Se descubrió la sustracción de \$367.542 decomisados de la Notaría que era de José Cabrera, guardados en la P.J. de Machala (El Comercio 11/11/2006). Fueron apresados el ex Comandante Provincial (Barclay) el ex Jefe de Tránsito, Víctor Espinoza; el ex Jefe de la PJ, Pablo Páez y Carlos Peñafiel, Subjefe de la P.J. (El Comercio 11/11/06). Los policías encargados de la bodega (José Lua y Fernando González), confesaron el robo (El Comercio 25/11/06). Los tres coroneles serán removidos (El Comercio 30/11/06).

La imagen de la Policía se afectó nuevamente tras conocer que 6 uniformados ayudaban a escapar a Oscar Caranqui (preso por narcotráfico) del ex penal García Moreno. Caranqui habría salido varias veces con ayuda de los uniformados (El Comercio 14/11/06). El Juez décimo quinto de lo Penal de Pichincha dictó prisión a cuatro oficiales, y cuatro policías involucrados (Expreso de Guayaquil 16/11/06). La Comisión de Fiscalización, llamó a comparecer a Caranqui, José Vinuesa, Antonio Andretta y Ricardo Arteaga, para esclarecer los hechos (Expreso de Guayaquil 21/11/06). Caranqui señaló los nombres de los oficiales que le ayudaron a salir (Hoy 22/11/06). La Corte de Quito ratificó la condena: 16 años para Caranqui y su esposa por narcotráfico (El Comercio 30/11/06).

Ante los hechos, el Presidente Palacio pidió una depuración total (El Comercio 14/11/06). El Comandante General Vinuesa ha señalado que dentro de su plan de auto depuración, entre enero a junio de 2006, existen 60 uniformados con orden de prisión y con procesos penales, de los cuales solo cuatro son oficiales. Para Diario Hoy, los sucesos provocan una pérdida de confianza en la Institución (Hoy 14/11/06). El Comercio

Menciona que el Presidente elevó a problema estatal la crisis de la Policía; que es estructural e inciden factores como la incapacidad de autodepuración (El Comercio 15/11/06).

Datos de la Inspectoría General de la Policía señalan que "en dos años 6.466 policías han sido investigados administrativamente": 316 oficiales, clases y policías han sido dados de baja, 1.447 fueron sancionados disciplinariamente y 1.084 pasaron a órdenes de la autoridad competente, en el resto no se encontraron elementos para las sanciones (Expreso de Guayaquil 15/11/06). En los dos últimos años, han sido 3.073 los que han cometido faltas disciplinarias o actos delictivos, solo 13 son de mandos bajos y el resto clases (Hoy 16/11/06).

Para Wilmon Padilla (Inspector General) ha fallado la selección de personal, bajo el nuevo plan estratégico que no fue cumplido "casi nada". "No hemos hecho un análisis sociológico", lo debía hacer la Dirección de Educación de la Policía (Expreso de Guayaquil 15/11/06). Según el Director Alfonso Camacho, se revisaron los antecedentes penales (El Comercio 18/11/06).

Carlos Vera Rodríguez señala que la impunidad ha campeado por la existencia de escasas acciones, como remoción de las cúpulas (El Comercio 16/11/06). Farith Simon, señala que el problema es institucional, centralizado y jerarquizado. La Policía ha sido manejada a imagen de la las FFAA. Para Freddy Rivera, el problema también es por politización e injerencia externa para los uniformados (El Comercio 18/11/06). Fernando Carrión sostiene que en 2005 se investigó a 3.368 policías por problemas disciplinarios (9% del total de los policías), lo cual delata que el problema no es de casos aislados (Hoy 18/11/06). El Gnrl. Jorge Villarroel, ex Comandante de la Policía, dice que se debe implantar la unidad jurisdiccional, existir una buena selección de personal, capacitación y ayuda civil para que se impartan materias importantes. La legislación es antigua, el Código Penal es de 1959 y el Código de Procedimiento Penal de 1970. No hay armonía con procedimientos, principios ni Derechos Constitucionales (Hoy 20/11/06). Clemente Haro escribe que las sanciones siempre son sobre la tropa, mientras que superiores que están comprometidos, gozan de inmunidad (Expreso de Guayaquil 20/11/06). Para Rodrigo Tenorio Ambrossi, la Policía avergüenza a todos, pero se debe señalar que hay miembros probos y leales (Hoy 21/11/06). Paúl Velasco sostiene que la institución se ha convertido "en una de las más corrompidas del estamento público nacional" (Expreso de Guayaquil 22/11/06).

Las denuncias continuaron, provienen del Myr. Álvaro Cadena, que solicitó a Contraloría que investigue el

manejo de dinero por parte de la esposa del Comandante Vinuesa, Rocío Tamayo, Directora de la Fundación de la Policía. Fundebit, habría descontado \$2 sin autorización de los 42.000 gendarmes para una rifa; y que investigue por la transferencia de \$8 millones para el proyecto de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (Expreso de Guayaquil 21/11/06). La Comisión Anticorrupción emitió un informe donde se detecta indicios de responsabilidad penal en contra de los Generales Rodrigo Cartagena y Mario Morán, los cuales habrían malgastado fondos públicos para comprar impresoras y materiales para licencias (El Comercio 24/11/06). El contrato con la empresa Defencorp, fue firmado por Cartagena, el monto fue de \$139.720 (Expreso de Guayaquil 24/11/06).

Gustavo Larrea, Ministro de Gobierno designado, apoya un proceso de reforma. Se intentará conseguir una Policía "más humana, donde se respeten los derechos humanos de los civiles y de los uniformados" (El Comercio 28/11/06). La propuesta es dividir a la institución en: Policía Comunitaria, y la Técnica Judicial, Unidades Antisecuestros y Antidroga serán fortalecidas (Hoy 02/12/06). El Ministro de Gobierno Antonio Andretta, prepara reformas a la Ley Orgánica y de Personal, serán conocidas por el Presidente, quien remitirá al Congreso (Expreso de Guayaquil 29/11/06).

Guayaquil: Plan "Más Seguridad" en manos de la Policía Nacional. El 15 de diciembre finalizó la cobertura del Plan Más Seguridad. La Policía Nacional se ha fortalecido en 120% en relación a 2000, así lo dijo Gustavo Zúñiga, Director de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (Expreso de Guayaquil 14/12/06). Según Jaime Nebot, el Plan continúa como apoyo de la Alcaldía en ciertos momentos necesarios (El Comercio 25/12/06). La Corporación de Seguridad Ciudadana entregó 330 radios portátiles a la Policía. Son de última generación y su señal no puede ser copiada por otros receptores. El Alcalde Nebot señaló que en los tres meses siguientes se entregarán 250 motos, 3.800 pistolas, 150 fusiles y 250 subametralladoras. Se presentó a los 700 nuevos gendarmes que pasan a órdenes del Regimiento Guayas No. 2, solo para Guayaquil serán 330 (Expreso de Guayaquil 21/12/06).

5. **ACCIONES DE LA POLICÍA FRENTE AL NARCOTRÁFICO**

Se encontraron laboratorios de base de cocaína. Policía Antinarcóticos de El Oro, allanó dos propiedades donde se elaboraba base de cocaína, para comercializar en el extranjero (Hoy 12/11/06). En San Juan de Cerro Azul (Machala), se encontraron instalaciones de procesamiento de cocaína, el lugar lo custodian policías del GEMA, este laboratorio es el más grande que

ha existido en el país, y ha invertido cerca de \$1 millón (Expreso de Guayaquil 15/11/06). El 6 de diciembre, la Policía pesó la cocaína hallada en Machala, que sería cercano a 800 kilos. También encontró paquetes de droga enterrados en la zona llamada Río Chico. La Policía Antinarcóticos de Manta los envió al Ministerio Público que determinó positivo la presencia de clorhidrato de cocaína. No se ha informado si los operativos tienen enlace (El Comercio 07/12/06).

6. CAMBIOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA

Intranquilidad entre los militares ha generado la posibilidad de que un civil sea Ministro de Defensa.

Según un oficial (pidió no identificarse) el Alto Mando prefiere a un ex militar. La preocupación se da porque en la nueva Ley Orgánica se crea el Viceministerio civil. Un coronel señaló: "El Alto Mando quiere un Ministro que no cause un remezón, y que no esté desactualizado con relación a los nuevos escenarios de seguridad". Se escuchan nombres como del asesor del Ministerio, Pablo Celi y los generales (r) Oswaldo Jarrín y René Vargas. El primero sería la opción de los militares si Correa no desiste de un civil, Celi desconocía la postulación y considera necesaria una persona que maneje los temas relacionados con la Defensa, "civil o militar" (El Comercio 12/12/06). Para Vargas la intervención de FFAA en política ha afectado su imagen y los militares deben volver a las academias e institutos; se debe revisar el Libro Blanco, porque convierte a FFAA en represivas y en Policía antidrogas (El Comercio 12/12/06).

El cargo de Ministro de Defensa no es exclusivo para ex Generales del Ejército. Según la Constitución debe ocupar dicho cargo un: ecuatoriano de nacimiento, hijo de padres ecuatorianos, mayor de edad, con título universitario. Para Bertha García debe primar el conocimiento del tema, "el Ministro es el encargado de administrar las Políticas de Defensa, por lo que no es necesario un ex militar. Donde sí se requiere militares es al frente de las tropas, en el terreno" Para Augusto Barrera, debe conocer de Política Exterior sin que sea el papel de Canciller (El Comercio 13/12/06). El 15 de diciembre tuvo en lista de candidatos, a la ex Diputada por Azuay, Guadalupe Larriva. El Ministro Delgado señaló que no existe impedimento para que un civil presida dicha cartera (El Comercio 16/12/06). El designio de Larriva, alta dirigente de izquierda, corroborado por Correa parece una provocación a las FFAA. El Presidente electo ha dicho que "todas las instituciones del Estado estén claramente sujetas a la sociedad civil. Por eso, para nosotros es importante romper la tradición". Larriva tiene formación en temas territoriales y geográficos, Doctora en Geografía y una Maestría en el IGM (El Comercio 28/12/06). Para Diario Hoy, esta situación provocará una saludable relación del Mando con el poder civil, fortaleciendo el Estado de Derecho en Ecuador, "esperemos que la "inexperiencia" de Larriva, y del país, no sea un obstáculo para que esta reparación se opere" (Hoy 29/12/06).

CON EL AUSPICIO DE:



BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Comité Editorial

Bertha García Gallegos
Fernando Bustamante Ponce
Francisco Rhon Dávila
Juan Pablo Aguilar Andrade

Asesoramiento Internacional

Dr. Louis Goodman - American University (USA)
Dr. Gustavo Suárez Perterra - Real Instituto Elcano
(España)

Investigación

Juan Rivadeneira Frisch

Relaciones Públicas

Inés Cevallos Breilh

BOLETÍN DEMOCRACIA, SEGURIDAD Y DEFENSA

Toda correspondencia, favor dirigir a:

Av. 12 de Octubre y Patria
Universidad Católica. Torre 2, Piso 9, Oficina 901
Teléfonos:
(593-2) 299 1582
(593-2) 299 1700 ext. 1124

E-mail: bgarcia@puce.edu.ec

Correspondencia y solicitud de ejemplares del boletín:
e-mail: jarivadeneira@puce.edu.ec